

## El terremoto de la ciudad de México: balance a mediano plazo

CLAUDE BATAILLON

En septiembre de 1985, los medios de comunicación difundieron la noticia de que una catástrofe de grandes proporciones había estremecido a la ciudad de México: un terremoto.<sup>1</sup> En este artículo presentamos, después de otros anteriores,<sup>2</sup> un intento por hacer el balance social del acontecimiento, el cual se halla atravesado por la paradoja. Tomando en consideración que se trata de la ciudad más grande del mundo, proporcionalmente, la devastación (en vidas humanas y bienes diversos) es bastante insignificante; pero el impacto del acontecimiento transmitido por los medios masivos de comunicación provocó algunas transformaciones tal vez irreversibles: se habla de la contaminación urbana de una manera nueva y, a partir de esa fecha también, se evalúa en forma distinta los informes de gobierno y de la sociedad misma. ¿Qué relación tiene todo esto con el sismo? Que provocó rupturas de orden moral ahí donde las tensiones se habían acumulado.

Recordemos que la prensa mundial pudo atestiguar el *movimiento social* que surgió en la urbe para el rescate de las víctimas sepultadas bajo los escombros. La participación de los habitantes de la ciudad permitió que sus ciudadanos la redescubrieran: su centro congestionado e inhóspito, que cada día se evitaba más, a menos que se trabajara ahí, y donde se concentró la destrucción, despertó recuerdos adormecidos y reencontró valores de antaño. Los intelectuales llaman la atención acerca de que las capacidades de iniciativa, devoción y hasta heroísmo, siguen vivas en los ciudadanos de la capital, por debajo de un barniz de cinismo e ironía cotidianos que permiten hallar protección ante las dificultades y las tensiones que sin cesar se acumulan. Nadie imaginó la vigilancia comunitaria

<sup>1</sup> Véase Alain Vanneph, "Le séisme de Septembre à Mexico", *Cahiers des Amériques Latines*, núm. 4, 1987, pp. 7-30 (en edición previa en *L'Ordinaire du Mexicaniste*, núm. 98, enero 1986, pp. 17-24); del mismo autor, exposición en tableros móviles disponible en la ORSTOM, al cuidado diligente de la señora Lacroix.

<sup>2</sup> De C. Bataillon: "Les citoyens de Mexico et le tremblement de terre" en *La grande ville latino-américaine*, por aparecer en 1987 en las ediciones ORSTOM-Toulouse, C. Bataillon y J. Gilard, coordinadores. En *L'Ordinaire du Mexicaniste*, expediente de prensa, en el núm. 95, pp. 1-38, "Les effets sociaux et politiques du temblor", núms. 100-101, p. 53.

y solidaria que se mantendría muchos meses, sostenida entre una masa integrada por 18 millones de personas. Por una parte, las asociaciones de damnificados se estructuraron en grupos de presión frente a los poderes públicos... o cerca de éstos: más adelante veremos que una parte considerable de las demandas fueron satisfechas, con lo que afortunadamente dejaron de tener sentido parte de las presiones de los dirigentes. Por otra parte, la crítica a las autoridades en un nivel político global se dirigió hacia otros objetivos: durante el verano de 1986, la atención se desplazó a la frontera norte del país, en el estado de Chihuahua, con motivo de la disputada elección para gobernador, en una circunstancia tal que el candidato de la oposición habría podido derrotar por primera vez al candidato del partido que gobierna el país desde hace casi sesenta años. Luego, en 1987, las polémicas en torno a la designación del candidato de este mismo partido a la presidencia de la república son el centro del debate de la opinión pública. Sin embargo, aunque la crítica desplazó sus objetivos, hasta cierto punto se trata del mismo movimiento democrático que afirma el lugar de los ciudadanos frente al partido y frente al Estado, en unos términos y un nivel que el país no conocía antes del terremoto: la catástrofe natural abrió en el sistema político una brecha que no se ha vuelto a cerrar.

Por su parte, los medios internacionales de comunicación no se han despegado desde ese entonces de la ciudad de México, que sigue siendo el centro de los acontecimientos. En julio de 1986, el Mundial de Fútbol congrega a la prensa internacional en dicha ciudad. En mayo de 1987, la capital hace que se hable de ella, más modestamente esta vez, al ser sede del Congreso Metrópolis.<sup>3</sup> ¿Cuál fue entonces la imagen que se proyectó? Todos tuvieron que corroborar que los servicios públicos, tan criticados, se sostuvieron, y esto desde el día siguiente al sismo; pero sobre todo, que la administración de la ciudad se mantuvo, que numerosas llagas se borraron, si no es que se curaron; que la habilidad legendaria de negociar, de aligerar la carga, de seducir a los medios de comunicación, no dejó de funcionar. La ciudad de México no prevaricó ni ante el evento deportivo ni ante el cónclave sobre las metrópolis; por el contrario: utilizó la ocasión para exhibirse y, más que buscar consuelo, intentó renovar el *satisfecit* de la comunidad internacional, que por un momento se había resquebrajado.

Paralelamente, los periodistas extranjeros demuestran que nadie es capaz de aprehender este inmenso organismo urbano de un modo total: acertijo o madrépora de células múltiples, dispuestas en una funcionalidad improbable, no obstante cada quien descubre en ella lo que vino a buscar y obtiene un *flash* del drama, la miseria o la modernidad.

<sup>3</sup> Dossier Mundial, *L'Ordinaire du Mexicaniste*, núm. 103, junio de 1986. *Autrement*, núm. 18 fuera de serie, mayo de 1986. Metrópolis: expedientes de prensa distribuidos por esta asociación.

Sin pretender superar por completo el enigma, intentemos hacer un balance retrospectivo después de dos años. En la *gestión* administrativa, hay dos imágenes de los primeros días que permanecen, y que sólo un estudio ulterior permitirá esclarecer, si no es que hacer coincidir. Por una parte, los servicios públicos, en particular aquellos cuyas oficinas, expedientes y archivos fueron destruidos total o parcialmente, no zozobraron. Se encontró locales vacíos y fueron ocupados, y la máquina volvió a funcionar pagando sus salarios y administrando su presupuesto, con lo cual aseguraban por lo menos las tareas más urgentes. Pero ¿por qué entonces el Estado, a la hora del rescate, redujo su presencia a un simple mantenimiento del orden? ¿Endeble credibilidad de una policía corrupta? Así fue, sin duda, pues la tarea quedó a cargo del ejército. ¿Carecía aquélla de los medios técnicos para ayudar al rescate, o existía el temor de dejarle tomar iniciativas que habrían tenido demasiado éxito? Este expediente no puede cerrarse todavía.

El *impacto* del sismo es, ya se ha dicho, cuantitativamente mínimo si se compara con la magnitud de la ciudad. Si admitimos que hubo pérdidas humanas del orden de las 30 000 personas, probables y seguramente superiores a las cifras oficiales, tal cifra representa la mortalidad media de la urbe durante menos de cuatro meses; o bien, aún menos de una décima parte del crecimiento anual total de ésta: mucho menos en realidad que el margen de incertidumbre estadística sobre el crecimiento indicado.

Si los efectos demográficos son muy limitados, la destrucción material no lo sería menos si no hubiese afectado sectores estratégicos. En términos globales, los cuatro mil millones de dólares adelantados por la CEPAL representaron menos de la décima parte del PIB mexicano en 1985. Lo que hay que investigar con respecto a ello es qué se reconstruyó en un lapso muy breve (de algunas semanas a unos cuantos meses) o en un plazo mediano (los dos años pasados), y gracias a qué fuentes de financiamiento (préstamos o donaciones, inversiones del Estado, de asociaciones o de particulares, mediante la compra de bienes producidos en el país o equipos importados...). Nuestra enumeración sectorial es, evidentemente, muy aproximada, pues proviene fundamentalmente de fuentes periodísticas. Ante todo, advertirnos el contraste entre algunos sectores sensibles, en los que las acciones fueron a fin de cuentas muy rápidas, y otros en los que la reconstrucción no responde a imperativo alguno, aun en el mediano plazo.

A la cabeza de las prioridades estaba reestablecer las *conexiones telefónicas* nacionales e internacionales de la capital, sector en el que la destrucción se calculaba en más de 500 millones de dólares: en unos meses, se hicieron las inversiones (esencialmente en importaciones) y el servicio volvió a funcionar en forma normal. La evaluación, de menos de 500 millones de dólares en lo que se refiere a la destrucción de obras arte, corresponde a equipos mucho más variados, entre los cuales ignoramos lo

que se arregló totalmente y lo que simplemente se reparó. El hormigón resistió en puentes, túneles, en el Metro, etcétera, mientras que el cableado eléctrico pudo repararse con celeridad y el alcantarillado sufrió daños muy dispersos: ¿cuántas fugas menores de las tuberías subterráneas no fueron detectadas ni reparadas?

Las pérdidas en *edificios públicos* representan el capítulo más oneroso; entre ellas se encuentran el sector hospitalario y el escolar. Este último era vulnerable a causa de la mala calidad de muchas de las escuelas prefabricadas. En este caso, la demanda de reconstrucción era también la más apremiante: la evaluación de 500 mil alumnos "en la calle"<sup>4</sup> (quienes tomaban clase en las aceras) representaba una imagen que había que borrar prioritariamente; y desde noviembre de 1985, 200 mil alumnos ya habían vuelto a conseguir escuela (seguramente, en los locales menos estropeados), mientras que los otros se hallaban reubicados en su totalidad hacia febrero y marzo de 1986, aunque sin duda algunos de ellos en instalaciones provisionales. En el sector hospitalario, los estragos fueron más costosos que en las escuelas, dado que se trata de edificios de gran tamaño que contienen equipos sumamente caros. Al cabo de dos años, las obras hospitalarias no habían sido terminadas del todo, en lo que respecta a las unidades concebidas en pequeños edificios de 150 camas (después del traumatismo y ante los daños ocasionados por los defectos en las grandes unidades, y en vista de que el sector hospitalario sufrió numerosas víctimas).

Quedan las oficinas ministeriales y de otras funciones administrativas. Al parecer, ahí no hubo ninguna prioridad en la reconstrucción: se escalonó ya que los diferentes servicios fueron reubicados ya en diversos locales disponibles que, aunque se encontraban dispersos (con los inconvenientes que eso tiene para las tareas administrativas), no había con todo tanta urgencia, tanto más cuanto que las disponibilidades presupuestarias obligan a escalonar los trabajos.

La destrucción de edificios de las *empresas privadas* suma un poco más de la mitad de la cifra alcanzada por el sector público: ¿hay menor concentración en los sectores más afectados del centro citadino, o menos casos de imperfecciones en las construcciones de grandes edificios? Más allá de los rumores de una opinión sensible a las acusaciones de corrupción en las administraciones, sólo un análisis detallado permitiría zanjar la cuestión. El sector de los grandes hoteles del centro fue el más impresionante por el número de víctimas, en virtud de que, al igual que los hospitales, se encontraba mucha gente en su interior a la hora del siniestro (7:19 horas), a diferencia por fortuna de la mayor parte de las empresas y, aún más, de las escuelas. Mas, ya se trate de hoteles o de ofici-

<sup>4</sup> El censo de 1980 arrojó las siguientes cifras para el Distrito Federal (donde se concentran esencialmente los estragos): 2.2 millones de niños de 5 a 14 años, de los cuales 0.5 son escolarizados y 1.7, escolarizados: fue, así, más de una cuarta parte de éstos los que quedaron privados temporalmente de escuela.

nas, privadas o públicas, se echa de ver fácilmente, todavía en la primavera de 1987, que muchos edificios que se conservaron, por no haberse dañado sus estructuras fundamentales, aún no se reparan. Si bien pueden existir a veces algunas dudas acerca del estado de la gran obra o de los litigios con las compañías de seguros, ello no impide advertir que la crisis que se ha enconado contra el país desde 1982 dejó disponibles importantes superficies de oficinas desocupadas, aun cuando, igual que las oficinas de gobierno, las empresas lograron reubicarse. El débil dinamismo de los negocios también ha dejado disponibles muchos cuartos de hotel. En fin, hoy en día, se busca más bien edificios chicos que grandes.

Las empresas más o menos clandestinas de las industrias del vestido, situadas en los vetustos inmuebles del centro, han padecido estragos dramáticos: sus obreras habían llegado, el día del siniestro, desde muy temprano por al mañana a su centro de trabajo, de ahí el número de víctimas. El escándalo representado por diversos talleres de costura conmovió a la opinión pública, y los empleos perdidos (entre 10 000 y 40 000) en este ramo no se recuperaron en el centro; por lo demás, no es sino la pequeña fracción conocida de una actividad muy dispersa en muchos barrios pobres de la periferia urbana.

De este modo, el sector de la industria que se hizo visible en el centro de la ciudad estremeció a la opinión, mientras que casi no se habló de los probables 100 mil o 130 mil empleados del sector de servicios, principalmente burócratas, aunque también empleados de hoteles, quienes en verdad perdieron temporalmente su lugar de trabajo, aunque retomaron indudablemente sus actividades después de algunas semanas en otros locales. Para comprender mejor hasta qué punto el terremoto no tuvo sino efectos modestos y temporales en la actividad y el empleo de la capital en su conjunto, recordemos que la población activa de ésta ascendía a 4.5 millones: solamente de 3 a 4% de los asalariados se vio perjudicado temporalmente, aunque es evidente que lo fue más en el ramo de la hotelería, y mucho más en el sector gubernamental, hospitalario y sobre todo escolar. Aunque débil para el cuerpo social de la ciudad en conjunto, el traumatismo se concentró en algunas actividades muy importantes y muy visibles. En verdad, fue duro el espectáculo de grandes construcciones en el centro transformadas en esqueletos y despojadas de lo que fueron ventanas, balcones y yesería, y sin los tabiques y los techos, ahora reemplazados por un maderamen de minas. Pero sólo por motivos de prestigio se verá alguien movido a invertir en esta porción de la reconstrucción cuando los negocios marchan bastante mediocrementemente.

El mismo contraste se da en la *vivienda*, entre algunos puntos en que se concentró la destrucción, sensibles en el plano político, y los damnificados dispersos que solucionaron solos el problema de su reacomodo. Desde el punto de vista financiero, menos de la cuarta parte de las destrucciones corresponde a las casas habitación. La elevada estimación de 100 mil viviendas inutilizables o destruidas es plausible y puede haber afectado

a 500 mil personas, es decir, menos del 3% de la población de la capital. Durante el invierno, los albergues realmente acogieron a unas 30 mil personas. Todavía en la primavera de 1987 se discute para determinar si los miles de personas que todavía residen ahí tienen algún derecho a una protección gratuita. Los campamentos de quienes organizaron sus viviendas por sí mismos cerca de las ruinas de sus casas, para asegurar su derecho a ser reubicados de inmediato, albergaron a unas 12 mil personas, de las cuales no todas se fueron en la primavera de 1987. Pero, mal que bien, se ha reubicado a los damnificados, ¿de qué manera?

Si las federaciones de asociaciones de damnificados declararon, en la primavera de 1986, que representaban a 120 mil personas, es porque las otras víctimas, digamos el triple, renunciaron en el transcurso de unos meses a hacer valer sus intereses y encontraron una solución por sí mismos: bien o mal, su casa podía repararse sin desembolsar mucho, o bien los medios financieros personales o la solidaridad de los familiares les permitieron encontrar una casa, quizá más exigua y peor situada que la que perdieron.

Entre 15 y 20 000 personas, sobre todo empleados de la clase media, perdieron el departamento en el que vivían. Los daños mayores se produjeron en especial en dos grandes conjuntos, una cuarta parte en el multifamiliar Benito Juárez y el resto en Tlatelolco, el más dañado de los dos. La reubicación fue más rápida en el primer caso que en el segundo; para más de la mitad, se realizó gracias a la dotación de un departamento construido por el sector público, y para los otros, en virtud de una indemnización en dinero. Si debieron liquidarse la mayor parte de los expedientes desde finales de 1986, se siguen litigios ya sea respecto de la calidad y ubicación de la vivienda recibida, ya sea con respecto a la suma otorgada, o bien por los ocupantes que permanecieron adentro de los inmuebles averiados, pero no evacuados, respecto de la lentitud o la insuficiencia de las operaciones realizadas. Si bien el grupo de presión de los residentes de estos grandes conjuntos habitacionales está activo, es numéricamente modesto, en esta ciudad donde predominan la vivienda individual o en pequeños edificios, de manera que las grandes organizaciones de condóminos o copropietarios constituyen la excepción a la regla.

Sin duda, la concentración más elevada de viviendas destruidas se encuentra en el *viejo centro* (zona colonial con una franja del norte de la ciudad), a la vez por razones topográficas (zona muy afectada en su conjunto) y urbanísticas (abundancia de viviendas de baja calidad y sobre todo degradadas); el proceso es clásico: acumulación de gente pobre más o menos marginada; pérdida de prestigio de los barrios en cuestión; imposibilidad para los propietarios de sacar provecho de sus inmuebles y, por lo tanto, de expulsar a sus inquilinos y recuperar sus terrenos para fines más rentables, pese a sus deseos de ello. Aquí la piedra angular de la degradación de la vivienda es la ley de los años cuarenta que decretó las rentas congeladas. Estas colonias tienen una población acostumbrada

desde hace varias décadas a organizarse para hacer frente a los dueños o a los servicios públicos cuando se intenta echarlos. La presión de los colonos ha conducido a un decreto de nacionalización que afecta alrededor de unas 250 hectáreas y beneficia a unos 180 mil habitantes: primera operación mediadora efectuada por un gobierno al que inicialmente se acusó de pasividad frente al desastre.

Después, vinieron las fluctuaciones en la ejecución de los proyectos y, más tarde, un nuevo intento de corregir la situación, esta vez a cargo de un nuevo secretario de Desarrollo Urbano, Manuel Camacho Solís. Las negociaciones con las asociaciones de damnificados se desarrollaron como sobre ruedas. La decisión de reubicar de inmediato, demanda particularmente apremiante, se aplicó extensamente. Las obras se llevaron a cabo, en predios a menudo pequeños, de una manera flexible, en conjuntos de algunas decenas de viviendas de dimensiones modestas, aunque bastante variadas, casas reunidas y construidas en dos niveles casi como casas solas que dan a un patio común: esto sustituye a las antiguas vecindades, en las que cada unidad tenía rara vez más de un cuarto, que daba a un corredor a la intemperie, y pocas contaban con un sanitario, y los lavaderos eran de uso colectivo. Con viviendas que tienen dos o tres cuartos más sanitario y cocina, el mejoramiento no puede negarse, con tal que los pagarés (distribuidos gracias a préstamos bonificados) sigan siendo llevaderos, lo cual puede conducir con el tiempo al despojo de la franja más necesitada de la población reacomodada. Otro problema es que el tejido urbano de estas colonias contenía superficies importantes destinadas a talleres, depósitos y tiendas. A primera vista, sólo estas últimas quedaron incluidas en la nueva distribución: ¿qué actividades artesanales, de industria o de reparación, o de comercio al mayoreo y menudeo (en el que el robo y el contrabando jugaban su parte) van a poder subsistir o redistribuirse? Queda este problema por estudiar.

De cualquier manera, en un año aproximadamente, hasta mayo de 1987, se inauguraron más de 40 000 viviendas (¿se alojó a 200 000 personas... a un mayor número de damnificados de los que había en la zona?) y son una buena imagen de marca de la renovación: compromiso arquitectónico flexible entre volúmenes modernos y acabados en ladrillo "coloniales", pinturas frescas de colores vivos, esto también entre la tradición rústica y el modernismo, mirada intimista que se posa sobre patios y corredores... limpios y nuevos. Era necesario dar gusto a los arquitectos extranjeros que visitaban la ciudad, a los urbanistas favorables a las soluciones alternativas, a los dirigentes de colonos... y, qué duda cabe, a una parte muy importante de los damnificados.

Todo nuestro inventario de estragos y reconstrucciones se refiere al corto y mediano plazo. Falta por ver el largo plazo, que es el futuro. Digamos que nuestra hipótesis es que la ideología de la ciudad de México, como motor de la modernidad nacional, ha caído hecha pedazos, mientras que muchos de los hechos anteriores al 19 de septiembre habrían podido

convencer a cualquiera, desde hace varias décadas, de que el crecimiento de la capital había entrado indiscutiblemente en la fase de los gastos, de los riesgos técnicos mayores y de los costos sociales y políticos cada día más incontrolables.<sup>5</sup> En primer lugar, las medidas paliativas y espectaculares del gobierno dejaron claramente establecido que, por lo menos hasta finales del siglo xx, la capital será la mayor aglomeración del mundo; aquellos que deseaban esto obscuramente ya no tienen nada que esperar en términos de récords. Los discursos sobre la *descentralización necesaria*, que ya cumplieron diez años, tomaron nuevos aires y pueden apuntalarse con hechos cada día más abundantes que al fin se descubren: la imposibilidad de proseguir con el modelo de crecimiento de los cuarenta, sobre todo porque los últimos veinte años han hecho evidente que esto es del todo imposible. En verdad, las pocas dependencias de gobierno que emigraron a provincia funcionan con lentitud en virtud de lo que eso cuesta y a causa de un número simbólico de empleados que aumenta a unos cuantos kilómetros: ir más lejos implica procesos de cambio sociopolítico que necesitan un tiempo mucho más largo y la formación de élites nuevas en el corazón de las clases medias provincianas.

El descubrimiento de la contaminación atmosférica de la ciudad de México a partir de 1986 es un ejemplo de esta inversión de coyuntura para el largo plazo. El hecho tiene razones topográficas (cubeta de altitud) y meteorológicas (anticiclón invernal) para desembocar en las inversiones térmicas clásicas bien conocidas al menos desde la década de 1960. Tampoco son nuevas las causas humanas: las empresas contaminantes han dejado de multiplicarse en los años setenta en el área metropolitana, que desde entonces atrae más los servicios que las empresas. Los gases de la gasolina de los automóviles ya casi no se incrementan (al menos mientras no haya embotellamientos) desde la crisis de 1982, que puso fin al crecimiento del arsenal automovilístico de la clase media. Pero bastó con que se presentara alguno de los helados días de enero o febrero de 1986, para que el umbral de contaminación alcanzado, superior al límite de alerta durante varias horas seguidas y durante varios días, mereciera una primera plana en los periódicos, como nunca antes. No cabe duda de que el deseo habitual de prudencia, de parte de las autoridades, cedió su lugar a la intención de convencer, a una población traumatizada, de que los riesgos naturales que se ciernen sobre su ciudad son una amenaza permanente que vuelve imposible proseguir con la expansión del modo de vida de las clases media y alta, que tuvo como modelo el de Los Ángeles.

*Traducción de Martha Donís*

<sup>5</sup> Véase, por ejemplo, la buena reprimenda tecnológica que significó San Juanico en 1984, *L'Ordinaire du Mexicaniste*, núm. 88, enero de 1985, pp. 2-20.